

Santiago, diecisiete de abril de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En autos RIT T-10-23, del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, caratulados “Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes con Cervecería Austral S.A.”, por sentencia de siete de noviembre de dos mil veintitrés se acogió la denuncia por prácticas antisindicales y se condenó a la denunciada al pago del 100% de la cuota sindical correspondiente a los trabajadores a quienes se extendió el beneficio a partir de la fecha en que la sentencia se encuentre ejecutoriada, con los correspondientes reajustes, suscribiendo el correspondiente contrato de extensión, en caso de que lo deseen y ordenó remitir copia de la sentencia a la Dirección del Trabajo y al Ministerio de Hacienda para los fines del artículo 4° de la Ley N°19.886.

La denunciada dedujo recurso de nulidad y la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, lo acogió y en sentencia de reemplazo rechazó la denuncia.

En contra de este último pronunciamiento, la denunciante interpuso recurso de unificación de jurisprudencia para que esta Corte lo acoja y dicte la sentencia de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna de la o de las que se invocan como fundamento.

**Segundo:** Que la materia de derecho que se solicita unificar consiste en *“determinar el correcto sentido del artículo 322 del Código del Trabajo, en lo referente a quienes se aplican las cláusulas de un instrumento colectivo”*.

Reprocha que no se aplicó la doctrina contenida en las sentencias Rol N°654-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago y Rol N°777-2022 de la Corte de Apelaciones de Concepción, que apareja para efectos de su cotejo, que



contienen la correcta interpretación del artículo en comento, esto es, que desde la entrada en vigencia de la Ley N°20.940, que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales, un empleador únicamente puede aplicar un beneficio estipulado en un instrumento colectivo cuando se pacta un acuerdo de extensión de beneficios con la organización que los negoció, determinándose en él que si los trabajadores que no participaron en la negociación aceptan expresamente recibirlos, quedarán obligados al pago del todo o de parte de la cuota sindical del respectivo sindicato.

**Tercero:** Que la sentencia estableció los siguientes hechos:

1.- Con fecha 13 de agosto de 2022 el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Cervecería Austral S.A. y Comercial Patagona Limitada y la empresa Cervecería Austral S.A y Comercial Patagona Limitada, suscribieron un contrato colectivo de trabajo.

En su cláusula primera establece las partes a quienes afecta, esto es, *“a la empresa Cervecería Austral S.A. y Comercial Patagona Ltda., por la otra, a los trabajadores sindicalizados e individualizados en nómina adjunta al presente instrumento y a todos aquellos que posterior a la firma del presente instrumento ingresen a la organización sindical.”*

En sus cláusulas cuarta y quinta, respecto a la jornada extraordinaria y las gratificaciones, respectivamente, el convenio colectivo establece que la empresa pagará a los trabajadores afectos al presente contrato. Los bonos son tratados en su cláusula sexta y establece que el de escolaridad, nacimiento, matrimonio y vacaciones, se pagará a los mismos trabajadores, esto es, los afectos al contrato colectivo. El numeral 11 de la cláusula en comento establece el denominado “bono de producción” en el siguiente tenor: *“La Planta de Cervecería Austral pagará a todos los trabajadores que tengan participación en el área productiva, un bono variable mensual cuyo monto se determinará en función de los resultados obtenidos en el mes anterior para los indicadores de gestión.”*

2.- Desde el 2002 la denunciada paga a sus trabajadores una serie de bonos; así, desde el contrato colectivo de 2017 paga uno variable por diferenciación de proceso productivo a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados.

3.- En las reuniones del sindicato no se dio cuenta de diferencias o inquietudes respecto a la extensión del beneficio del pago de producción.

Sobre la base de tales antecedentes la sentencia impugnada razonó que la cláusula primera del referido contrato colectivo solo da cuenta de las partes a quienes afecta, lo que no permite restar valor a la cláusula sexta N°11, ya que en



relación con los bonos el contrato va utilizando fórmulas distintas, dependiendo de a quién beneficia. De lo anterior, concluyó que las partes acordaron bonos para los trabajadores afectos al contrato colectivo y, por otro lado, acordaron que el bono de producción se pagara a todos los trabajadores involucrados en dicho proceso, por lo que el compromiso de la empresa denunciada es otorgar el cuestionado beneficio sin diferenciar si están o no sindicalizados y en, consecuencia, desestimó la existencia de una actuación constitutiva de práctica antisindical.

**Cuarto:** Que, para la procedencia del recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una materia de derecho, esto es, que frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se haya arribado a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles, que denoten una divergencia doctrinal que debe ser resuelta y uniformada.

**Quinto:** Que, para dar lugar, entonces, a la unificación de jurisprudencia, se requiere analizar si los hechos establecidos en el pronunciamiento que se reprocha, subsumibles en las normas, reglas o principios cuestionados como objeto del arbitrio, sean claramente homologables con aquellos materia de las sentencias que se incorporan al recurso para su contraste.

Así, la labor que le corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma jurídica que regla la controversia, al ser enfrentada con una situación equivalente a la resuelta en un fallo anterior en sentido diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el fallo impugnado y aquellos traídos como criterios de referencia.

**Sexto:** Que en relación a la materia de derecho propuesta en el intento unificador, se acompañaron como sentencias de contraste las dictadas por las Cortes de Apelaciones de Santiago y de Concepción en Roles N°654-2018 y 777-2022, respectivamente.

En la primera, de 20 de febrero de 2019, se estableció que en la cláusula 29 del acuerdo suscrito el 16 de octubre de 2017, ambas partes pactaron un acuerdo de extensión de beneficios, reglamentando los efectos de la prohibición de su extensión unilateral y se acordó los derechos que se estimaban extensibles a todos los trabajadores por la empresa, cuáles por el sindicato y cuáles no estaban afectos a extensión; en la cláusula 30, las partes acordaron qué beneficios no constituyen extensión del contrato colectivo (locomoción, colación, seguro de vida,



compensación por gastos médicos e implementos de trabajo). Sobre la base de tales hechos se concluyó que cualquiera de los beneficios estipulados en el respectivo instrumento que no esté contemplado en el acuerdo de extensión, en caso de existir uno, podría encontrarse dentro de la hipótesis de práctica antisindical contemplada en el artículo 289 letra h) del actual Código del Trabajo, con la sola excepción del inciso segundo de ese precepto. Precisa que la redacción actual del artículo 322 del Código del Trabajo impide sostener la licitud de la extensión de beneficios a terceros no integrantes del convenio colectivo cuya fuente sea la decisión unilateral del empleador, sin la aquiescencia del sindicato.

En la segunda, de 4 de enero de 2023, se estableció que el 3 de mayo de 2021 el sindicato presentó un proyecto de contrato colectivo para la negociación reglada, que el 20 de mayo de esa anualidad se acogió a lo dispuesto en el artículo 342 del Código del Trabajo y se puso término al proceso de negociación colectiva aceptando el piso de la negociación respectiva, con un contrato colectivo cuya duración por ley corresponde a 18 meses. Además, el 29 de junio de 2021, un grupo de 44 trabajadores reunidos como grupo negociador presentó al colegio un proyecto de acuerdo colectivo para una negociación colectiva no reglada, conforme al artículo 314 del Código del Trabajo, suscribiéndose con fecha 23 de agosto de 2021, entre el colegio empleador y la comisión negociadora de estos trabajadores reunidos para tal efecto, un acuerdo colectivo. Luego, razona que *“cualquiera haya sido el piso de la negociación, según lo dispuesto en el artículo 336 del mismo Código, se excluye de este instrumento el acuerdo de extensión de beneficios, que había sido acordado en la cláusula décimo sexta del contrato colectivo de 18 de julio de 2022, con vigencia hasta el 1 de julio de 2021, entre la misma demandada y el sindicato, a todos los trabajadores no sindicalizados, previo pago del 100% de la cuota sindical ordinaria, con acuerdo expreso de los trabajadores, sin que exista constancia de lo contrario”* y sostiene que la conducta acreditada se subsume en la hipótesis del artículo 289 letra h) del Código del Trabajo, que considera una práctica antisindical *“otorgar o convenir con trabajadores no afiliados a la organización u organizaciones que los hubieren negociado, los mismos beneficios pactados en un instrumento colectivo, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 322 del este Código”*, relacionada con el actual artículo 322 del Código del Trabajo, modificada por la Ley N°20940, al disponer la extensión de beneficios solo con acuerdo del sindicato y con la



aceptación de los trabajadores y pago de todo o parte de la cuota ordinaria de la organización sindical.

**Séptimo:** Que los fallos acompañados por la recurrente no contienen una distinta interpretación sobre la materia de derecho objeto de este juicio, toda vez que resuelven sobre la base de presupuestos fácticos diversos a aquéllos planteados y resueltos en la resolución aquí impugnada, no cumpliéndose con el presupuesto contemplado en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a desestimar el presente recurso de unificación de jurisprudencia.

En efecto, la sentencia de contraste Rol N°654-2018 de la Corte de Apelaciones de Santiago, se dictó considerando que el empleador y el sindicato pactaron un acuerdo de extensión de beneficios, los que el primero reconoció a trabajadores que no forman parte del segundo, sin su aquiescencia; en la segunda, Rol N°777-2022 de la Corte de Apelaciones de Concepción, se tuvo por acreditado que existió una negociación colectiva reglada con un sindicato y posteriormente, vigente el contrato colectivo, el empleador acordó con un grupo de trabajadores similares beneficios a los pactados en el contrato colectivo; mientras que en la impugnada se tuvo por acreditado que el empleador y el sindicato acordaron en el contrato colectivo que aquel entregue el bono de producción a todos los trabajadores de esa área, sin diferenciar si están o no sindicalizados.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del ramo, **se rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte denunciante, en contra de la sentencia dictada con treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

Regístrese y devuélvase.

Rol N°7.292-2024

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las ministras señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Jessica González T., y las abogadas integrantes señoras Leonor Etcheberry C., y Fabiola Lathrop G. Santiago, diecisiete de abril de dos mil veinticinco.





En Santiago, a diecisiete de abril de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

